



JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Armenia Q., treinta y uno de julio del dos mil veintitrés

Procede el despacho a proferir decisión de fondo dentro del presente proceso de revisión de interdicción respecto de **Daniel González Arévalo** conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, de manera escrita y el lenguaje claro y comprensible para la persona con discapacidad.

ANTECEDENTES

En el proceso de declaratoria de interdicción se profirió decisión el 11 de diciembre de 2012, designándose como consejera a Isabel Cristina Arévalo Carrascal.

ACTUACIÓN PROCESAL

Por auto del 29 de septiembre del 2022 se inició la revisión de la sentencia que declaro la interdicción, disponiéndose como salvaguardia la designación de profesional del derecho que represente los intereses procesales de la persona con discapacidad, con quien se surtieron las etapas correspondientes; se convocó a audiencia para la instrucción del proceso y se decretaron pruebas, entre ellas visita socio familiar y valoración de apoyos.

En audiencias realizadas el 23 de junio y 21 de julio de 2023, se llevaron a cabo etapas de fijación del litigio, control de legalidad, recepción de prueba testimonial, e informe de visita socio familiar, valoración de apoyos y alegatos correspondientes.

El literal d) del numeral 5 del artículo 56 prevé al hacer referencia a la sentencia de Revisión a continuación del proceso de Revisión que: "*Emitir*

sentencia en lectura fácil para la persona con discapacidad inmersa en el proceso, explicando lo resuelto”.

Así entonces considera el suscrito que la sentencia lo debe ser por escrito.

CONSIDERACIONES

El artículo 56 de la Ley 1996 preceptúa en su parte pertinente:

“En ambos casos, el juez de familia determinará si las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación requieren la adjudicación judicial de apoyos, de acuerdo a:

1.- La voluntad y preferencias de las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Por lo anterior, la participación de estas personas en el proceso de adjudicación de apoyos es indispensable so pena de nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la presente ley.

2.- El informe de valoración de apoyos, que deberá ser aportado al juzgado por cualquiera de los citados a comparecer según lo dispuesto en el presente artículo, en el plazo que el juez disponga, y en todo caso, antes de la fecha señalada para comparecer ante el juzgado. En caso de que los citados a comparecer aporten más de un informe de valoración de apoyos, el juez deberá tener en consideración el informe más favorable para la autonomía e independencia de la persona, de acuerdo a la primacía de su voluntad y preferencias, así como las demás condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente ley...

3.- La relación de confianza entre las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de actos jurídicos.

4.- Las demás pruebas que el juez estime conveniente decretar.

5.- Una vez vencido el término para la práctica de pruebas, el juez escuchará a los citados y verificará si tienen alguna objeción. Posteriormente, el juez procederá a dictar sentencia de adjudicación de apoyos, la cual deberá...”

Planteamiento Jurídico

Determinar si **Daniel González Arévalo**, requiere la adjudicación de apoyos, durante qué término y quién debe ser la persona que suministre dichos apoyos o si en virtud de las pruebas recaudadas no requiere la adjudicación de apoyos.

Adjudicación Judicial de Apoyos

El órgano de cierre civil con ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, en providencia del 22 de enero del 2021¹ expresó:

"Es del caso señalar que la Ley 1996 de 2019, se inspiró en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas Con discapacidad, aprobada mediante la Ley 762 de 2002, y la cual tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.

El artículo 2º de la Ley 1996 de 2019, exige una interpretación acorde con los instrumentos internacionales aprobados por Colombia. En este contexto es pertinente señalar que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, establece:

"Artículo 1.1. Discapacidad. El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (...)".

130. La Corte considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el

¹ 11001-22-10-000-2020-00607-01

deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. No obstante, la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado".^[97]

En la misma providencia expresó que: "Con sustento en lo anterior, con el fin de reemplazar las instituciones jurídicas que anulan la voluntad de las personas con discapacidad intelectual o mental, se crea un modelo de apoyos a favor de esta población con el objeto de lograr que puedan ejercer directamente su derecho a la capacidad jurídica, y con ello, se garantice su autonomía, independencia y dignidad humana. En el marco del modelo social de la discapacidad se comprende que el ejercicio de la capacidad legal debe estar acompañado con una asistencia que elimine las barreras sociales, culturales y ambientales que no permitan manifestar la voluntad. De este modo, como lo dice el Comité de la Convención, los "apoyos" implican un conjunto de "arreglos oficiales y oficiosos, de distintos tipos e intensidades". En otras palabras, los apoyos se pueden traducir en distintas medidas encaminadas a lograr la materialización de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Estos apoyos pueden ser el acompañamiento de una persona de confianza en la realización de algún acto jurídico, métodos de comunicación distintos a los convencionales, pueden ser medidas relacionadas con el diseño universal o la accesibilidad, entre otros. Los tipos de apoyo y sus intensidades dependerán y variarán notablemente de una persona a otra debido a la diversidad de las personas con discapacidad y sus necesidades. Los objetivos principales de los apoyos deben ser: "(i) obtener y entender información; b) evaluar las posibles alternativas a una decisión y sus consecuencias; c) expresar y comunicar una decisión; y/o d) ejecutar

una decisión. Lo realmente importante bajo este modelo de apoyos, es la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, elementos que serán ahora el centro de la toma de sus decisiones”.

Más recientemente la Corte Constitucional en sentencia T-048 del 2023 expresó que:

“Retomando, el sistema de apoyos reemplazó las figuras que sustituían la voluntad de la persona en situación de discapacidad mental. Lo anterior, al punto de que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019 consagró la “prohibición de interdicción”, a partir de su expedición. Actualmente, en consecuencia, no está permitido (i) “iniciar procesos de interdicción o inhabilitación” o (ii) “solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley.” Sentido del régimen de transición. Para que el tránsito del régimen de interdicción y guardas al de autonomía y apoyos no genere efectos indeseables derivados de la eventual celebración de actos jurídicos que puedan afectar los derechos de la persona que fue declarada interdicta o los de su familia, la Ley 1996 de 2019 debe interpretarse a partir de dos grandes previsiones.

La primera, se encuentra en el parágrafo del artículo 6 que establece la “Presunción de capacidad.” Esta disposición afirma que “el reconocimiento de la capacidad plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. “La segunda, el artículo 56 el cual alude al “Proceso de revisión de interdicción o inhabilitación” en virtud del cual se dispone que: (i) dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigencia del Capítulo V de la ley -sobre adjudicación judicial de apoyos-, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio tanto a quienes cuenten con una sentencia de interdicción o inhabilitación, así como a las personas designadas como sus curadores o consejeros, con el fin de determinar si aquellos requieren la adjudicación judicial de apoyos; (ii) dentro del mismo término, las personas afectadas por

una de estas medidas podrán acudir directamente ante el juzgado de familia que adelantó el proceso respectivo para solicitar la revisión de su situación jurídica; con todo, (iii) el juez de familia determinará si las personas interdictas o inhabilitadas requieren la adjudicación judicial de apoyos, conforme a (iii.1) su voluntad y preferencias; (iii.2) el informe de valoración de apoyos aportado al juzgado por los comparecientes, el cual deberá contener la verificación de que, aun después de agotar todos los ajustes y apoyos técnicos disponibles, la persona se encuentra “imposibilidad para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio posible”; (iii.3) los apoyos que la persona requiere para la comunicación y toma de decisiones en su vida diaria, “o en lo relacionado con el manejo financiero, salud y demás aspectos relevantes, en caso de que la persona se encuentre imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio”; y (iii.4) las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones. Por último, el segundo párrafo del citado artículo 56 establece que aquellas personas bajo medidas de sustitución de la voluntad proferidas con anterioridad a la ley, “se entenderán como personas con capacidad legal plena cuando la sentencia del proceso de revisión de la interdicción o de la inhabilitación quede ejecutoriada.” El diseño legislativo, basado en el reconocimiento de la capacidad jurídica y la autonomía, pero consciente de la necesidad de un régimen de transición, puede generar algunas dudas interpretativas, que deben ser resueltas a partir del principio de interpretación conforme a la Constitución Política, a la que se encuentra incorporada también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.²

Primero, la Convención citada exige que aquellas figuras jurídicas que permiten sustituir a través de un tercero las decisiones, voluntad y preferencias de las personas en situación de discapacidad sean abolidas, con el fin de que aquellas puedan ejercer, independientemente de si hacen uso de apoyos o no, su plena autonomía, independencia y dignidad humana. Por esta razón, el Legislador prohibió adelantar nuevos procesos de declaratoria de interdicción o inhabilitación, a partir de la expedición de la Ley 1996 de 2019.

Segundo, el Congreso de la República condicionó la anulación de los efectos

de aquellas declaratorias de interdicción establecidas antes de la promulgación de la norma antes referida a que estas sigan un proceso de revisión, bien sea de oficio, bien a petición de parte. Pues bien, una interpretación sistemática de ambas disposiciones, y armónica con la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conduce a la conclusión de que la revisión de la sentencia tiene como única finalidad la evaluación de necesidad de apoyos, pero no a preservar en el tiempo la figura (ni la lógica) de la interdicción, pues esta es una institución opuesta al paradigma del derecho internacional de los derechos humanos en materia de capacidad. Aunada a esta conclusión, desde un punto de vista teleológico o finalista, la aplicación de las normas del régimen de transición debe mantener el enfoque de maximización de la autonomía, pues este no nace en la ley citada, sino que irradia desde la propia Constitución”.

CASO CONCRETO

Está acreditado que **Daniel González Arévalo**, cuenta con 28 años de edad, lo que se desprende del registro civil de nacimiento que obra en el proceso primigenio, quien intervino de manera personal en las audiencias llevadas a cabo en este asunto.

Del dictamen de valoración de apoyos se desprende que Daniel tiene capacidad verbal fluida, se logra entablar conversación mediante la cual proporciona respuestas claras tomando un tiempo prudente para procesar la información, sin embargo la entrega de manera coherente y pertinente frente a lo preguntado, se indica además que no se encuentra absolutamente imposibilitado para la manifestación de su voluntad de acuerdo la visita realizada a su lugar de residencia; además se indica que Daniel labora en la empresa de su padre, como jefe de bodega recibiendo un salario mínimo mensual, realiza salidas sin acompañamiento, ha practicado deportes como natación y realizado cursos como de gastronomía.

Daniel González Arévalo en la intervención que realizó ante el despacho tuvo una comunicación fluida, narró sus estudios terminados, superiores y otros

cursos, su labor como jefe de bodega en la empresa familiar, hizo referencia que igualmente recibe como ingresos unos arriendos, da cuenta de sus bienes, los cuales fueron adquiridos por la familia y dejada la titularidad a su nombre, algunas deudas personales suyas, manifestó con claridad que espera no tener hijos, dio razón de su conocimiento del dinero, del uso que de él hace de manera personal, que maneja tarjeta crédito, conduce vehículo.

Ante el desarrollo durante el transcurso de la audiencia el despacho le indagó de manera directa si se considera una persona con discapacidad a lo cual adujo que: *"...a ver a mí la palabra no me agrada mucho pero hay que aceptar la realidad, y yo se qué sí, inclusive, en mi certificado esta, si yo si me considero una cosa es que la palabra no me guste pero acepto las falencias que tengo y las cosas buenas que tengo y soy consciente de las cosas que hago y las que no hago.."* más adelante en otro interrogante sobre su autonomía indicó *"...en un 80% sí... si en algunas cosas (al referirse a los apoyos)... aunque yo crea a veces que no lo necesito, que yo soy libre, yo decido, yo creo que hay momentos en los que, pues uno no mira lo que hace o uno actúa de manera de que uno no es consciente de que, o uno es consciente pero se le va la pila a uno, muchas veces cualquier cosa que yo vea cualquier cosa que yo escuche la puedo creer y aunque no me han pasado cosas así súper graves ... yo los bienes con mucha gente no lo comento yo se que yo pues, yo no voy a firmar ni hacer nada sin preguntar pero uno no sabe que puedan, es que uno ya no puede confiar en nadie ..."* (frente a la persona de confianza expresó) *"...pues con la persona con quien yo vivo en mi casa es con mi mamá y la que, pues, aunque con mi papá comparto mucho como la que sabe yo que tengo se preocupa porque tiene que hacer tal cosa, ella es la que me recuerda lo que se me olvida..."* (salud) *"...yo puedo ser autónomo de pedir una cita o cualquier cosa yo mismo me he dado cuenta que yo puedo hacer las cosas pero que a veces no las hago porque no quiero o porque se me olvidan pero yo me he dado cuenta que puedo hacer las cosas porque cuando no me hacen las cosas y me toca hacerlas a mi o cuando lo dijo yo se que las hago y me quedan bien, para cosas como esas yo pido mi cita, yo voy y todo y obviamente a mi papá que es médico yo siempre le pregunto mira tal cosa, él médico dijo esto ... yo*

siempre le pregunto y como mi papá es médico yo prefiero preguntarle aunque yo pido la cita y voy yo hasta la cancelo, yo lo hago..."

Se concluye con lo anterior aunado se itera con lo evidenciado en la prueba de valoración de apoyos que Daniel González Arévalo, no solo es una persona con discapacidad, sino que la acepta, da cuenta de sus habilidades diferenciales, precisa con claridad como se evidenció en la continuación de la audiencia, sus bienes, sus recursos, que puede y toma decisiones de manera autónoma, no requiere en su vida de apoyos informales.

Ahora bien, admite que requiere a su modo de ver la vida, apoyo en la toma de decisiones importantes, y de vital importancia indicar aquí que afirma que no hará nada sin consultar previamente.

Señala a su progenitora como persona de confianza, lo que se ratificó con el interrogatorio de la misma, el testimonio de su progenitor y el resultado de la visita socio familiar.

Así entonces se determina que al revisar la sentencia de interdicción la respuesta al interrogante dado en el planteamiento jurídico en la parte inicial es positiva, es decir, que en efecto Daniel, dada su condición de discapacidad leve, requiere de la adjudicación de apoyos y así procederá el despacho.

Los apoyos formales se determinarán en el ámbito de la salud (solo frente a la toma de decisiones vitales para su vida) y en virtud a los bienes en cabeza del sujeto titular del acto jurídico; para la toma de decisiones en cuanto a la administración de estos bienes y cualquier diligencia que respecto de ellos deba realizarse en cualquier entidad, tanto de salud como financiera.

De otra parte, respecto a determinar la persona que lo representará en algún acto jurídico, la norma establece que, en caso de ser necesario, se deberá elevar la petición correspondiente en tal sentido, conforme inciso 2 del artículo 48 de la Ley 1996.

No puede perderse de vista finalmente, que la ley 1996 recupera la capacidad legal de aquellas personas sobre quienes recaía la medida de interdicción, cuya figura la desplazaba, así entonces, en virtud de esta decisión finaliza la declaratoria de la interdicción judicial y por tanto el registro que de él aparece vigente en el correspondiente registro civil de nacimiento, razón por la cual se remitirá esta decisión a la Notaría Cuarta del Circulo de Armenia Q, para que proceda a la cancelación de tal registro.

Ahora bien, en cuanto al término de duración, debe precisar el despacho que por las especiales circunstancias del presente caso, dicho apoyo se determinará por un (1) año, pues al cabo del mismo, se evidencia que es dable que Danil González Arévalo verifique su situación actual, en ese momento, de continuar requiriendo apoyos es diáfano concluir que puede acudir al proceso de Adjudicación Judicial de Apoyos consagrado en la Ley 1996 de manera personal, ora puede acudir de manera extraprocésal a definir acuerdos de apoyo o incluso directivas anticipadas.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Armenia Quindío administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Adjudicar Apoyos a Daniel González Arévalo, identificado con cédula de ciudadanía 1.094.945.601, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Designar como persona de apoyo a **Isabel Cristina Arévalo Carrascal**.

TERCERO: Definir como apoyo formal en (i) ámbito de la salud (solo frente a la toma de decisiones vitales para su vida); (ii) ámbito del patrimonio, para la toma de decisiones en cuanto a la administración de los bienes y cualquier diligencia que respecto de ellos deba realizarse ante cualquier entidad.

CUARTO: Determinar cómo duración de los apoyos el término de un (1) año.

QUINTO: Anular la inscripción de la sentencia de interdicción en el Registro Civil de Nacimiento de la persona con discapacidad. Remítase electrónicamente la presente providencia a la Cuarta del Circuito de Armenia Q.

SEXTO: Advertir que **Daniel González Arévalo**, se entenderá como persona con capacidad legal plena cuando la presente decisión quede ejecutoriada, con las previsiones sobre la validez de los actos conforme la Ley 1996 y con las previsiones hechas en la parte motiva respecto de los actos jurídicos que requiera realizar en el futuro.

SÉPTIMO: Remitir a los intervinientes dentro del proceso, la presente decisión. En firme la presente decisión culmina la gestión del apoderado designado de oficio.

OCTAVO: Notificar al público por aviso, que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, en este caso se determina El Espectador y en el Micrositio Web del que dispone el Juzgado en la Página de la Rama Judicial.

NOVENO: Disponer al término de cada año la realización de un informe desde la ejecutoria de la sentencia de adjudicación de apoyos en el cual dispondrá:

1. El tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo injerencia,
2. Las razones que motivaron la forma en que prestó el apoyo.
3. La persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el titular del acto jurídico.

NOTIFÍQUESE

OMAR FERNANDO GUEVARA LONDOÑO

Juez

Firmado Por:

Omar Fernando Guevara Londono

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 003

Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **22d934eaab2ef5d083445bc1b7457de4c89a5a6c09e67e9dcca019ee9ed8ccdb**

Documento generado en 31/07/2023 11:33:57 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>